

Ignacio Martín-Baró

Actitudes en El Salvador ante una solución política a la guerra civil

RESUMEN

Las actitudes de los principales grupos salvadoreños ante la guerra civil y su posible solución expresan su particular perspectiva e intereses de clase. Pero el valor real de las soluciones propuestas sólo puede juzgarse en el marco de las raíces últimas del conflicto así como de sus causas inmediatas. El análisis documental de las posturas públicas muestra que en todo el espectro político hay grupos que sólo aceptan una solución puramente militar al conflicto y grupos más abiertos a una solución política negociada. La opción militarista adoptada por el gobierno norteamericano parece ser la base última de la negativa del gobierno salvadoreño a un proceso de mediación, ignorando así los datos objetivos del conflicto y el sentir de amplios sectores de la población que expresan su deseo de una pronta solución negociada. Este deseo aparece con claridad en un sondeo de opinión realizado entre universitarios salvadoreños (N = 719). La falta de una adecuada conciencia colectiva sobre la realidad de la situación oscurece aquellos puntos de interés común que harían posible una negociación directa provechosa, lo que exige tanto una clarificación de esa conciencia como una mediación que prepare las bases de un diálogo. Con todo, conversaciones iniciales entre algunos grupos con puntos coincidentes, como el FDR y la UPD e incluso el PDC, podrían abrir el camino para una ulterior negociación que buscara una solución real al conflicto salvadoreño.

1. Conflicto y negociación.

Las actitudes surgen históricamente como la estructura psicosocial que expresa cómo los individuos y los grupos valoran algo a partir de sus raíces de clase y su particular experiencia. Así, para entender una actitud hay que examinar primero el objeto de esa actitud. Por ello, para comprender el sentido de las acti-

tudes que los principales grupos sociales de El Salvador tienen hacia una eventual solución política a la presente guerra civil, es importante recordar la naturaleza del conflicto y la vivencia que de él han tenido los diversos grupos.

Podemos sintetizar la guerra civil salvadoreña en cuatro aspectos: sus raíces estructurales, el fracaso del reformismo, la guerra larvada de la seguridad nacional y la confrontación formal de 1981.

Parece evidente que las causas últimas de la guerra civil en El Salvador hay que buscarlas en su estructura social. La sociedad salvadoreña está fundada en un orden económico profundamente injusto e irracional, donde el 5.6% de la población absorbe el 29.5% del ingreso nacional, mientras el 47.0% tuvo que conformarse en 1977 con un ingreso mensual menor en promedio a los 50.00 colones (El Salvador, 1978, pág. 6). Cualquiera que sea el indicador social elegido de vivienda, salud, educación, empleo, nivel de participación social u otro, los datos son siempre elocuentes y expresan una radical división entre una minoría nadando en la abundancia y aun el lujo y una inmensa mayoría sumida en una espantosa miseria. El agravante trágico es que esta situación de miseria, en lugar de mejorar, se ha ido empeorando año tras año.

Las diferencias abismales en la distribución de la riqueza constituyen una fuente perenne de malestar social y son el producto natural de una estructura viciada de raíz, cuya modificación real sólo es posible mediante cambios revolucionarios. De hecho, los intentos por modificar esa estructura con simples reformas han fracasado en El Salvador uno tras otro. En el área política, los fraudes en las elecciones presidenciales de 1972 y de 1977 sirvieron para confirmar el cierre del sistema a cambios políticos significativos por la vía electoral. El fraude de 1972 (Hernández-Pico y otros, 1972) constituyó, muy posiblemente, el momento en que un buen sector de la población comprendió que no había otro camino posible hacia el cambio social en El Salvador que el de las armas, y empezó a organizarse en ese sentido. La frustración experimentada ante el fraude de 1977 no hizo sino ahondar esa convicción o abrir los ojos a quienes todavía se resistían a la evidencia de los hechos. En el área socioeconómica, el mejor ejemplo de la inviabilidad del reformismo en El Salvador lo constituyó el estrepitoso fracaso del proyecto de Transformación Agraria promovido por el gobierno del Coronel Molina en 1976 (A sus órdenes, 1976). Este fracaso no sólo sirvió para poner al desnudo la impotencia de los gobiernos de turno, aunque contaran con el respaldo de la Fuerza Armada, para imponer reformas a la oligarquía, sino que dejó en la población salvadoreña, sobre todo en el campesinado, la amarga vivencia de un nuevo engaño y de tener que pagar con la propia vida el pecado de creer en promesas reformistas. No es de extrañar así el escepticismo con que el pueblo

organizado recibió el golpe de estado del 15 de octubre de 1979. Con todo, el golpe contó en un primer momento con el beneficio de la duda por parte de diversos sectores nacionales, deseosos de propiciar urgentes reformas en el país con un mínimo de costo social. Sin embargo, el pronto fracaso del movimiento del 15 de octubre agravó aún más la situación de El Salvador, al que dejó sumido en una orgía de sangre.

A medida que el reformismo mostraba su inviabilidad en El Salvador, su complemento práctico, la represión, aumentaba desmesuradamente hasta constituirse en la tónica principal de la política oficial. Si la crisis de 1932 tuvo que "resolverse" con el asesinato de por lo menos 30,000 campesinos y desde entonces el sistema había mantenido en el campo una fuerza encargada de abortar cualquier conato de movilización y aun de simple organización reivindicativa, desde 1948 las periódicas crisis del tímido reformismo promovido por los militares salvadoreños serán también "resueltas" por crecientes oleadas represivas (López Vallecillos, 1976). Desde 1972, el simple mantenimiento del orden social va a requerir una altísima dosis de represión violenta, amparada ya en las racionalizaciones de la llamada doctrina de la seguridad nacional (Comblin, 1977; Campos, 1979). A medida que la organización popular, campesina y obrera, crece en extensión y en profundidad, crece también la espiral represiva que, tras el fracaso del 15 de octubre, alcanza en 1980 niveles de verdadero exterminio, rayano con el genocidio (González, 1980). La represión instaura un reino de terror paralizante; sin embargo, genera también un profundo y generalizado sentimiento de aversión tanto contra los ejecutores inmediatos de la represión (los cuerpos de seguridad) como contra quienes, desde el poder económico y político, alimentan, mantienen y dirigen a los instrumentos represivos. La represión sirve así como acicate emocional hacia una confrontación en la que la simple defensa de la propia vida coincide con la defensa de los intereses de clase y el logro de la justicia vindicativa.

El estallido formal del conflicto civil en enero de 1981 parece corresponder a un grado elevado de madurez, política y militar, del movimiento revolucionario así como a la clausura violenta y total del espacio político en El Salvador (Martín-Baró, 1981). Hay quienes mantienen que para ese entonces ya se habían dejado pasar oportunidades históricas más favorables para la in-

surrección. Se puede también apuntar a que los hechos mostraron inmadurez militar de los revolucionarios. En cualquier caso, lo que durante 1980 fue una guerra civil larvada se formaliza con la orden de movilización del FMLN y su ofensiva general iniciada el 10 de enero. Al ataque de los insurgentes, la Fuerza Armada salvadoreña responde poniendo en juego el máximo de su capacidad, mientras la Junta de Gobierno extrema las medidas de emergencia e intensifica la labor represiva. Ante el peligro de que el apoyo internacional con que cuentan el FDR y el FMLN decida el relativo equilibrio que se establece en el campo de batalla, donde ninguno de los rivales parece capaz de obtener victorias decisivas a corto y aun mediano plazo, los Estados Unidos ponen su maquinaria política y militar al servicio de la Junta de Gobierno. Con ello, se entra en un peligroso proceso de internacionalización vietnamizante de la guerra, que pasa por encima de las raíces estructurales del conflicto, convirtiéndolo en un simple caso de enfrentamiento entre las "superpotencias".

Hasta el momento (mayo de 1981), la ofensiva norteamericana no ha logrado inclinar decisivamente la balanza del conflicto del lado de la Junta, y no parece que vaya a lograrlo a no ser con un masivo desembarco de "marines", operación que resultaría excesivamente costosa en lo político incluso a la administración del señor Reagan; pero lo que sí ha logrado la ofensiva yanqui es un estancamiento de la lucha, que apunta ahora a una cruenta y costosa prolongación (Martín-Baró, 1981). De ahí es que las instancias internacionales más racionales, al mismo tiempo que han condenado la política militarista de los Estados Unidos, hayan empezado a presionar por una solución política del conflicto como el único camino realista, incitando al comienzo de algún tipo de diálogo entre las partes y ofreciendo el servicio de su mediación (Un proceso, 1981).

La guerra civil en El Salvador es una guerra de clases y, mientras no se cambie la estructura socioeconómica del país, será una guerra que ha de resurgir tozudamente cada vez con mayor virulencia. El problema de fondo consiste en que El Salvador ha estado en manos de una oligarquía intransigente, cerrilmente opuesta hasta al más mínimo cambio o recorte a sus privilegios. En buena medida, esta intransigencia oligárquica ha imposibilitado el éxito, aun parcial, de las reformas sociales intentadas incluso por sectores

militares progresistas, como es el caso del 15 de octubre de 1979. Mientras la oligarquía salvadoreña subsista como tal no habrá condiciones objetivas ni subjetivas para una solución estable a los problemas del país (Mayorga, 1981). Precisamente porque es consciente de ello, la oligarquía salvadoreña siente que su propia subsistencia como clase está en juego en el conflicto actual y a partir de esa conciencia actúa sin escatimar medio alguno.

Frente a la oligarquía intransigente están las masas hambrientas. Para comprender la situación anímica de la mayoría del pueblo salvadoreño hay que tomar en cuenta ante todo su situación objetiva de miseria y de creciente depauperación, así como el sufrimiento adicional causado por la aplicación sistemática de una brutal represión. En segundo lugar, hay que tener en cuenta la progresiva toma de conciencia de ese mismo pueblo sobre lo injusto de su situación, proceso de concientización al que han cooperado desde perspectivas diferentes los sectores católicos más abiertos del país y los sectores revolucionarios. Esta toma de conciencia ha potenciado la organización popular hasta el punto de que, a principios de 1980, podía calcularse que uno de cada tres salvadoreños de los sectores populares estaba vinculado, como miembro o simpatizante, a alguna organización de masas (López Vallecillos y Orellana, 1980). No resulta entonces aventurado suponer que la mayoría del pueblo salvadoreño podría abrigar una gran esperanza respecto al resultado del presente conflicto y que, en principio, sus simpatías estarían del lado de los insurgentes. Ahora bien, este tipo de esperanza, sea o no mayoritario en el pueblo salvadoreño, constituye un arma de doble filo, sobre todo cuando lo esperado tarda en materializarse.

Si la intransigencia de la oligarquía y sus aliados políticos ha sido y sigue siendo el impedimento principal para cualquier tipo de reformas en El Salvador, las necesidades objetivas de las mayorías populares y sus justas aspiraciones constituyen hoy el principal criterio para cualquier resolución realista al presente conflicto. Una solución que no tome en cuenta el poder de la oligarquía y el hambre desesperada de la mayoría no será de hecho solución. Ciertamente, hay en El Salvador y en todo Centroamérica un grave problema geopolítico; pero se trata de un problema que manifiesta no un supuesto expansionismo ruso-cubano, sino las inhumanas con-

más nos puede servir para el presente estudio es el de Walton y McKersie (1976), que analiza la negociación en los conflictos laborales distinguiendo cuatro dimensiones: la dimensión distributiva, la dimensión integrativa, la dimensión actitudinal y la dimensión intragrupal.

La dimensión distributiva se fija en los objetivos de las partes en conflicto, es decir, en los aspectos estrictamente discrepantes. Cada una de las partes tiene un margen de soluciones aceptables, desde los mínimos tolerables, que marcan su punto de resistencia, hasta los objetivos propiamente dichos, que constituyen el acuerdo más beneficioso que cada parte desearía obtener. La superposición de los márgenes de soluciones aceptables para ambas partes en un mismo diagrama muestra la zona de posible acuerdo o el margen que impide llegar a un acuerdo (ver Figura 1). En este último caso, una negociación directa puede resultar inútil y aun contraproducente en la práctica; es necesario buscar primero puntos de coincidencia entre las partes, y ésta es la labor que suele encomendarse a una instancia mediadora.

La dimensión integrativa de la negociación se refiere a aquellos objetivos que pueden ser de-

seables para ambas partes, y constituye el centro de atención, ya que son los puntos de coincidencia y de interés común los que pueden hacer culminar con éxito una negociación (en la Figura 1, sólo en el caso primero habría puntos de coincidencia entre las partes, representados por la superposición de las áreas sombreadas en la escala de objetivos). Es importante subrayar que el valor de una instancia mediadora consiste sobre todo en su capacidad para buscar y generar puntos de coincidencia entre las partes, es decir, para idear soluciones nuevas de tal manera que el atractivo del objetivo común haga aceptable a las partes el necesario compromiso al que tendrán que llegar en la dimensión distributiva.

La tercera dimensión está formada por las actitudes de las partes en conflicto. Aunque Walton y McKersie se refieren más explícitamente a las actitudes inmediatas de los negociadores mismos y a sus relaciones interpersonales, se puede asumir que las actitudes de los negociadores son la expresión de las respectivas actitudes de los grupos que representa. Walton y McKersie distinguen cinco posibles tipos de relaciones, cada uno de ellos caracterizado por cuatro atributos, como se señala en el Cuadro 1.

CUADRO 1
ACTITUDES QUE DEFINEN LOS TIPOS DE RELACIONES ENTRE
NEGOCIADORES

ATRIBUTOS EN TERMINOS DE ACTITUDES	TIPOS DE RELACIONES				
	Conflicto	Protección contra la agresión	Acomodación	Cooperación	Colusión
Orientación motivacional y actitud hacia otro en el plano de la acción	Tendencias competitivas con vistas de aniquilar o debilitar al otro	Individualista, sin interés por la política del otro	Tendencias cooperativas tendientes a ayudar o preservar al otro		
Actitudes en materia de legitimidad del otro	Negación de la legitimidad	Aceptación a regañadientes	Aceptación del statu quo	Reconocimiento total	
Nivel de confianza	Desconfianza extrema	Desconfianza	Confianza limitada	Confianza total	Confianza basada en el chantaje mutuo potencial
Actitud emocional respecto del otro	Odio	Antagonismo	Cortesía neutra	Amistad	Intimidad

Fuente: Walton y McKersie, 1965, pág. 189.

La última dimensión de la negociación incluida en el modelo de Walton y McKersie es la que corresponde a los procesos al interior de cada parte. No todos los miembros o sectores que integran cada una de las partes en conflicto mantienen exactamente los mismos puntos de vista respecto a la negociación y a las posibles soluciones al conflicto. En este sentido, una dimensión clave en un proceso de negociación la constituyen los conflictos y arreglos internos de cada una de las partes, así como las tensiones que se pueden generar entre los grupos y sus representantes en una negociación o entre los grupos y una instancia mediadora.

El objeto del presente estudio se centra en la tercera dimensión del modelo de Walton y McKersie, es decir, en las actitudes de los grupos más importantes ante la eventualidad de una solución política al presente conflicto salvadoreño a través de un proceso de negociación directa o de mediación. Esto no quiere decir que no habrá que prestar atención a las otras dimensiones de la negociación o mediación. Precisamente para poder caracterizar el porqué de las actitudes habrá que aludir a las divergencias y posibles convergencias entre las partes, lo que constituye las dimensiones primera y segunda del modelo de Walton y McKersie. Así mismo, habrá que examinar las eventuales diferencias existentes entre los sectores que componen cada una de las partes enfrentadas (la cuarta dimensión) a fin de evaluar las condiciones de viabilidad de una mediación. Sin embargo, el centro de atención estará en las actitudes de los grupos salvadoreños ante un proceso de negociación.

Generalmente se entiende por actitud la predisposición de una persona a actuar de determinada manera ante un objeto. La actitud consiste en el conocimiento y valoración que se tiene de un objeto, lo que se suele traducir en una determinada forma de actuar frente a ese objeto. Esto no quiere decir que a cada actitud corresponda una única forma de acción, lo que sería más bien un hábito (Duijker, 1967). Una actitud expresa una relación de sentido, la evaluación que un sujeto hace de un determinado objeto, pero que puede expresarse de formas muy diferentes, según sean distintas las circunstancias en que se manifieste la actitud. Lo que permanece constante es la relación de sentido entre el sujeto y el objeto, no las formas concretas del comportamiento.

Las actitudes son estructuras psicológicas

del individuo, pero que hunden sus raíces en los grupos sociales. Según el modelo más comúnmente aceptado, las actitudes constan de un elemento cognoscitivo, un elemento afectivo o evaluativo, y un elemento conativo o tendencial-comportamental (Krech, Crutchfield y Ballachey, 1965). Ahora bien, es la realidad objetiva de las clases y grupos sociales la que determina más radicalmente el mundo de intereses y valores de las personas (Berger y Luckmann, 1968), moldeando sus esquemas intelectivos y afectivos. Por ello, las actitudes fundamentales de los individuos constituyen la versión psicológica de la ideología propia de su grupo o clase social, cuyos intereses canalizan y concretizan en acciones.

Así entendidas, las actitudes no son simplemente el embalse de una forma concreta y única de conducta. Las actitudes son estructuras relativamente complejas y cada uno de sus elementos puede variar a lo largo de varias dimensiones (Krech, Crutchfield y Ballachey, 1965). Para el caso, cabe esperar que los grupos y personas tengan un conocimiento muy diverso respecto a las dimensiones de la guerra civil en El Salvador y, por consiguiente, una actitud más o menos matizada respecto a un eventual proceso de negociación mediada. Es muy posible también que existan sentimientos encontrados e incluso contradictorios acerca de una solución pacífica al conflicto, tanto más vivos cuanto más directamente se haya sufrido sus consecuencias. El deseo de una pronta pacificación puede ir de la mano con un intenso odio al enemigo, un inevitable resentimiento o el temor de que "no se haga justicia", cualquiera sea el contenido que se dé a este término.

El presente trabajo tiene dos objetivos. En primer lugar, pretendemos captar descriptivamente las actitudes existentes en los diversos grupos salvadoreños hacia una solución política, no militar, al presente conflicto. Nuestra hipótesis es que, a pesar de la polarización existente, hay diversas actitudes en todos los sectores y en todos los sectores hay grupos con actitudes positivas y negativas hacia una solución política, no militar, al conflicto. En segundo lugar, pretendemos examinar algunos de los factores relacionados con la actitud hacia la solución política. Nuestra hipótesis es que esa actitud está relacionada con el grupo con quien uno más se identifica así como con la interpretación que se da al conflicto.

2. Método de análisis.

Puesto que se trata de un análisis de las actitudes grupales ante la solución del conflicto salvadoreño, el primer punto importante consiste en establecer aquellos grupos cuya actitud hay que examinar. En la determinación de estos grupos se han seguido dos criterios: capacidad política y organización formal. Por capacidad política se entiende el poder para influir en los procesos de organización y funcionamiento del Estado y, en general, de la vida ciudadana. El poder de un grupo puede provenir de muy diversas fuentes, ya sea de sus recursos materiales, del número o calidad de sus miembros, o simplemente del espíritu que les anima. El criterio de organización formal requiere que el grupo tenga una identidad pública más o menos institucionalizada y, por consiguiente, que posea una estructura discernible más allá de los individuos que componen al grupo.

En la práctica, se ha utilizado un tercer criterio en la selección de grupos: la posibilidad de conocer su actitud ante el conflicto y su solución, lo que requiere disponer de algún documento en el que se haga público su sentir o de algunas declaraciones públicas de algún representante o vocero cualificado. Documentos y declaraciones públicas han servido de base para el análisis de las

posturas grupales. Obviamente, los documentos públicos tienen un carácter ideológico que puede encubrir los verdaderos intereses y opciones de los grupos. En este sentido, todo análisis documental es necesariamente incompleto, y necesita ser contrastado críticamente con las acciones prácticas de los grupos, que muestran el verdadero significado de sus afirmaciones.

La aplicación de estos criterios dio como resultado la selección de ocho grupos, de muy diverso carácter e importancia: la Alianza Productiva (AP), la Fuerza Armada de El Salvador (FA), el Partido Demócrata Cristiano (PDC), los Estados Unidos de Norteamérica (USA), la Iglesia Católica (IG), la Unidad Popular Democrática (UPD), el Frente Democrático Revolucionario (FDR), y la Organización Socialista Internacionalista (OSI).

Aunque más adelante se retomarán algunos de estos puntos, conviene hacer aquí algunas aclaraciones. Ante todo, se omite la postura de la Junta Revolucionaria de Gobierno (JRG) en el análisis documental, aunque se incluyó como objeto en el sondeo de opiniones. La omisión puede sorprender, ya que la JRG parece ser uno de los principales actores en el conflicto. Sin embargo, la JRG está constituida por un pacto entre la FA y el PDC, y las posturas de ambos grupos respecto a una solución política difieren en aspectos im-



portantes. Esto ha hecho que la JRG se haya mostrado ambivalente y aun contradictoria al respecto, según fuera quien hablara en su nombre. Pero, en definitiva, el sector militar ha impuesto su postura al sector civil, y la postura de la JRG coincide, al menos públicamente, con la postura de la FA.

Se ha omitido también las posturas de grupos que eventualmente podrían desempeñar un papel importante en un proceso de solución al conflicto, como el Partido de Orientación Popular (POP), el Partido de Conciliación Nacional (PCN) y, sobre todo, una agrupación nueva llamada la Movilización Democrática Salvadoreña (MDS). Las razones para esta omisión son varias. El POP, por ejemplo, no ha podido mostrar hasta el momento que cuente con una base significativa, ni social ni política. El PCN constituye en la actualidad una interesante incógnita política, que algunos sectores oligárquicos tratan de resolver en su beneficio. Es claro que la salida del gobierno ha permitido al PCN una purificación en sus miembros y en sus ideas. Sin embargo, su postura de oposición casi visceral al PDC podría afectar seriamente su evolución y llevarle a opciones puramente reactivas. Finalmente, la MDS es un movimiento demasiado reciente y aún sin formalizar, que hasta ahora sólo ha pretendido capitalizar la frustración y desubicación política de ciertos sectores medios, sobre todo de profesionales y medianos industriales. Aparentemente se trata de una escisión de la Alianza Productiva, con base en un sector de la Federación de Asociaciones de Abogados y pretendería jugar su baza política como alternativa de poder civil al PDC, propugnando una ideología socialdemócrata más conservadora que la del MNR.

En el presente estudio, la postura del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se presenta incorporada a la postura del FDR. Con ello no se pretende minimizar la importancia que para un proceso de solución política tienen las divisiones existentes al interior del movimiento democrático-revolucionario, por ejemplo entre el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y los grupos político-militares, o entre las Fuerzas Populares de Liberación "Farabundo Martí" (FPL) y la Resistencia Nacional (RN). Sin embargo, las divisiones no han impedido que ambos frentes, el FDR y el FMLN, hayan procedido unitariamente en lo referente a la solución política del conflicto a través de una comisión conjunta político-diplomática.

Finalmente, al referirnos a la Iglesia católica nos referimos principalmente a la Arquidiócesis de San Salvador, y más en particular a la postura adoptada por el actual Administrador Apostólico, Monseñor Rivera y Damas. Es claro que su postura no representa a toda la Iglesia salvadoreña, ni a toda la Arquidiócesis y posiblemente ni siquiera a la mayoría de la Iglesia arquidiocesana. Con todo, la postura oficial de la Arquidiócesis de San Salvador tiene un poder público de hecho que lo constituye como el grupo eclesial más importante en el actual proceso político de El Salvador.

Además del análisis documental y a fin de verificar algunos de los factores que pueden intervenir en las actitudes grupales hemos realizado un sondeo de opinión con un grupo de estudiantes universitarios. El sondeo, técnicamente desarrollado, pretendía examinar si la identificación con uno u otro grupo conlleva determinada actitud ante la solución al conflicto salvadoreño así como otros factores relacionados con la actitud. Estos datos nos permiten verificar a nivel de individuos las posturas expresadas públicamente por los grupos.

3. Actitudes de los grupos ante la resolución del conflicto.

Dos puntos principales pretendemos establecer en la actitud de cada grupo: qué tipo de solución al conflicto le parece más adecuada o deseable, y las razones principales para esa opinión, tanto respecto a la solución propuesta como respecto a las soluciones rechazadas.

La Alianza Productiva (AP).

Constituye la organización que últimamente ha articulado en público los intereses del gran capital salvadoreño, tradicionalmente agrupado en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). La AP hizo públicos dos comunicados los días 13 y 21 de marzo de 1981 (La Alianza, 1981a; 1981b), en los cuales expresa su postura ante el conflicto salvadoreño y su posible solución política.

AP parte del supuesto de que las fuerzas insurgentes han sido militarmente derrotadas, lo que AP presenta como un rechazo del pueblo salvadoreño a la subversión. En consecuencia, AP considera inadmisibles cualquier tipo de solución

política que incluya a los grupos de izquierda: son terroristas, no pretenden más que instaurar un régimen totalitario en El Salvador (lo que AP identifica como un régimen que ponga límites a la propiedad privada), y además han sido derrotados ideológica y militarmente. Dialogar con ellos sería ceder a sus pretensiones, realizar "transacciones ignominiosas".

AP propone como única salida posible un diálogo entre el gobierno y "las fuerzas de la paz y del trabajo". Con este término, AP alude a las organizaciones integradas en el sector gremial (ver su pronunciamiento en el "Diario de Hoy" del 13 de enero); en términos más directos, "las fuerzas de la paz y del trabajo" son para AP las empresas privadas afiliadas a ANEP. Así, la propuesta de AP hay que entenderla como la propuesta de una negociación entre las fuerzas de derecha y de ultraderecha ubicadas en los sectores público o privado. Como complemento a este diálogo, AP propone unas elecciones libres, en que pueda expresarse la voluntad mayoritaria del pueblo. Obviamente, el presupuesto de la exclusión de la izquierda como opuesta a la democracia reduciría estas elecciones a una contienda entre partidos derechistas.

La Fuerza Armada de El Salvador (FA).

Aun cuando la Constitución prohíbe que intervenga políticamente, la FA representa de hecho la principal fuerza política del país al que ha gobernado ininterrumpidamente durante los últimos cincuenta años. En la actualidad, la FA se encuentra internamente dividida entre diversas tendencias políticas y en parte esas divisiones aparecieron en septiembre de 1980, con motivo del enfrentamiento entre los partidarios del Coronel Majano y los partidarios de los coroneles Gutiérrez y García. En su posición de Ministro de Defensa, éste último parece haberse ido afirmando como el hombre fuerte del grupo militar.

Públicamente, el Coronel García ha insistido en diversas oportunidades en que la decisión sobre el diálogo o la mediación constituye una cuestión política en la que la FA no se inmiscuye (ver, por ejemplo, sus declaraciones reproducidas en "El Diario de Hoy" del 4 y 7 de marzo de 1981). Ahora bien, ésta sería una forma política de no desautorizar las declaraciones hechas extraoficialmente por otros voceros militares, según las cuales la FA se opondría absolutamente a cualquier tipo de diálogo con los insurgentes, cu-

ya finalidad sería destruir la institución armada, pero a quienes ya se habría derrotado militarmente ("El Diario de Hoy", 4 de marzo de 1981).

El Coronel García ha manifestado su apoyo a la política de la JRG y de los Estados Unidos de promover elecciones, lo que supone una alternativa a largo plazo a la decisión más inmediata de un proceso de mediación o de negociación. Esta negativa implícita al diálogo por parte de la FA quedaría reflejada en el endurecimiento de los controles represivos sobre la población civil y en la multiplicación a escala gigantesca de los operativos militares contra los insurgentes.

El 27 de abril de 1981, y ante la creciente presión internacional para que se iniciara un proceso de negociación entre las partes en litigio, la FA hace público un documento de trabajo de la Comisión Político-Diplomática del FDR-FMLN, en el que se propondría la mediación como una simple táctica o maniobra dilatoria ("El Mundo", 27 de abril de 1981). El documento es auténtico, y constituía una entre varias propuestas de acción presentadas a la CPD y que, de hecho, fue inmediatamente descartada. Sin embargo, este documento que habría estado en poder de la FA con bastante anterioridad, sirvió para justificar la tajante afirmación que haría el Coronel Gutiérrez en un discurso: "la Junta Revolucionaria de Gobierno rechaza rotundamente la mediación en el actual conflicto salvadoreño, ya que acceder a ella significaría prestarse a una maniobra del comunismo internacional" (Gutiérrez, 1981). En el mismo discurso, el Coronel Gutiérrez reiteró que "cuando hablamos de solución política y democrática, nos referimos exclusivamente a las elecciones".

El Coronel García daría inmediatamente su espaldarazo de hombre fuerte a estas afirmaciones aclarando que "la Fuerza Armada apoya lo expresado por el Coronel J. Abdul Gutiérrez en relación al rechazo de la mediación en el conflicto salvadoreño porque es una maniobra del comunismo internacional" ("El Mundo", 28 de abril de 1981).

Como colofón práctico a su negativa al diálogo, la FA publicó el 29 de abril de 1981 una "lista negra" donde estigmatiza y actualmente condena a 138 salvadoreños, entre los cuales se encuentran todos aquellos que, en la práctica, pudieran representar interlocutores de la oposición en un proceso de diálogo o negociación (ver "El Mundo", 29 de abril de 1981).

Los Estados Unidos de Norteamérica (USA).

La Embajada norteamericana constituye, sin duda alguna, el verdadero "poder detrás del trono" y quizás "en el trono" del actual régimen salvadoreño. Según todos los análisis, USA es la única fuerza capaz de imponer su voluntad a la FA y más tras haber definido el conflicto salvadoreño como un caso paradigmático de su postura internacional de fuerza frente al bloque soviético.

La administración de Carter intentó establecer un diálogo con el FDR basado en cinco puntos que constituían el "Plan Bowdler": cese inmediato al fuego, depuración de los cuerpos de seguridad, reorganización del gobierno, preparación de futuras elecciones y plan de reformas (El Departamento, 1981a). Sin embargo, la administración de Reagan interrumpió inmediatamente todo tipo de diálogo con el FDR y optó por una solución radicalmente militar (El Departamento, 1981b). Este giro apareció reflejado en las declaraciones del General Haig, Secretario de Estado, o de la señora Kirkpatrick, representante ante las Naciones Unidas, pero sobre todo se manifestó en el envío inmediato de grandes contingentes de armamento al ejército salvadoreño e incluso de un creciente grupo de asesores militares.

Ante las denuncias de diversos sectores de la oposición democrata, como los representados por el Senador Edward Kennedy, el gobierno de Reagan declaró que no buscaba una solución puramente militar, sino que pretendía una "solución política" al problema de El Salvador. Sin embargo, esta solución no sería ningún tipo de negociación o mediación con el FDR, como lo demuestra el rechazo norteamericano a las propuestas de mediación, incluso de la Iglesia ("Diario Latino", 4 de marzo de 1981), sino más bien el llamamiento a unas futuras elecciones que permitirían entre tanto una total victoria militar a la JRG.

Esta postura ha sido reafirmada posteriormente por el Departamento de Estado. En declaraciones públicas, un vocero señaló que los Estados Unidos se oponen a una negociación "si lo que significan por negociación o acuerdo negociado es el establecimiento de un gobierno sin elecciones" ("La Prensa Gráfica", 5 de mayo de 1981). Pero si lo que se pretende son conversaciones entre varios grupos salvadoreños "a objeto de determinar las condiciones y procedimientos para las elecciones, sí damos nuestro apoyo a tales negociaciones". Con todo, poco a poco se vislumbra un incipiente ablandamiento en la posición oficial del gobierno norteamericano ante





la presión de otros países europeos así como ante la fuerte oposición interna a su política hacia El Salvador, aunque no cabe esperar que ese paulatino ablandamiento se refleje pronto en hechos.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Desde su pacto con la Fuerza Armada a comienzos de 1980, el PDC se ha convertido en el nuevo partido oficial salvadoreño, aunque con menos poder de hecho que su antecesor, el Partido de Conciliación Nacional (PCN). Aparentemente, el PDC intentó establecer un diálogo con el FMLN antes de la ofensiva general del 10 de enero de 1981, sin que el intento llegara a fructificar. Tras la confrontación militar de enero, el PDC ha mantenido una postura más ambigua: el hecho de que sus miembros más representativos sean parte del gobierno les ha forzado a plegarse bajo muchos aspectos a la postura intransigente de la FA. Así, aunque el PDC ha seguido manifestando su disposición al diálogo, no siempre ha estado claro a qué tipo de proceso hacía referencia con ese término.

El mismo Ingeniero Duarte mostró cierta indecisión o impotencia política, al declarar primero que iría a dialogar con la oposición en Alema-

nia, para pocos días después cancelar el viaje, al parecer por presiones del sector militar y, muy posiblemente, de la Embajada norteamericana. En un discurso retransmitido a todo el país, Duarte ratificaría después su disposición al diálogo, pero no a la negociación. La JRG por él presidida no estaría dispuesta a negociar, ya que ése sería el camino buscado por el comunismo internacional para conseguir sus objetivos tras haber sido derrotado militarmente ("El Mundo", 14 de marzo de 1981). Lo interesante es que, en todas sus intervenciones, el Ingeniero Duarte ha identificado negociación con pacto gubernamental, en el sentido de repartición de los puestos de gobierno entre las fuerzas políticas. Pero si la JRG no está dispuesta a negociar, sí estaría dispuesta a "dialogar", como un camino necesario para lograr la paz y la democracia en el país. En la práctica, el diálogo parece significar para los voceros del PDC, primero y sobre todo, la aceptación del proceso de elecciones propuesto por la JRG, en las cuales el pueblo podría expresar libremente su voluntad (Duarte, 1981), y, segundo, alguna forma de conversaciones más o menos formales que permita aunar esfuerzos reformistas sin salirse de los límites fijados al proceso por el pacto entre el PDC y la FA.

Más recientemente y como respuesta a cier-

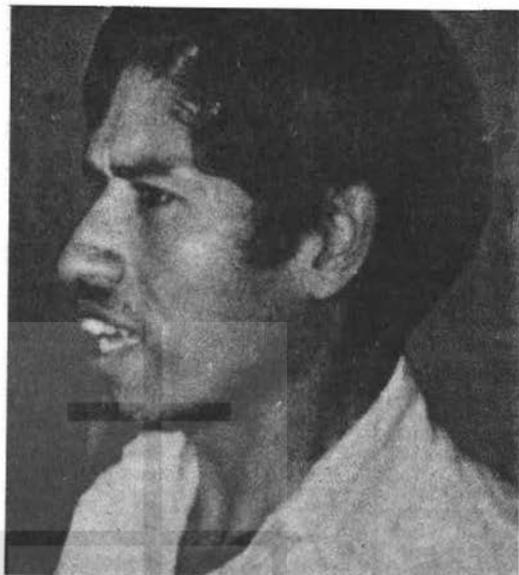
tas manifestaciones del FDR, Duarte ha declarado que "no puede irse a un diálogo bajo presiones de ninguna índole, y que tampoco pueden aceptarse mediaciones de extraños, que nada tienen que ver con los asuntos que aquejan a nuestro país" ("La Prensa Gráfica", 25 de abril de 1981). Así mismo, en un discurso televisado a todo el país, el Dr. Julio A. Samayoa, Secretario General del PDC, convocó en nombre de la Democracia Cristiana a "una reflexión profunda y a la implementación del diálogo nacional, como el instrumento más eficiente para dirimir y resolver nuestros propios problemas" ("El Diario de Hoy", 30 de abril de 1981, pág. 39). Significativamente, el diálogo propuesto por el PDC retrotraería al país a la solución ya propuesta por el todavía Presidente de la República, General Romero, en mayo de 1979.

La Iglesia Católica (IG).

Aun cuando la instancia jerárquica más amplia en la Iglesia salvadoreña estaría representada por la Conferencia Episcopal (CEDES), es de hecho la Arquidiócesis de San Salvador la que tradicionalmente ha llevado la voz y el peso ante la opinión pública, y mucho más con la extraordinaria vitalidad y prestigio que le confirió el período de Monseñor Oscar A. Romero.

Monseñor Rivera, Administrador Apostólico de San Salvador, se ha mostrado en repetidas ocasiones contrario al conflicto armado, tanto por razones éticas (el sufrimiento y destrucción producidas) como por razones pragmáticas (el enfrentamiento militar no va a resolver el conflicto). Por ello, aun antes de que se produjera el desencadenamiento formal de la guerra, Monseñor Rivera intentó propiciar el diálogo entre las partes. Posteriormente, ha ofrecido sus servicios mediadores ("El Diario de Hoy", 2 de febrero de 1981) y ha insistido en que sólo mediante el diálogo podrá resolverse el conflicto salvadoreño. Por otra parte, Monseñor Rivera parece pensar que la integración de un gobierno con la participación de la Democracia Cristiana y de la izquierda podría hacer viable la paz y la reconstrucción del país ("Diario Latino", 4 de febrero de 1981).

Más recientemente y en un viaje por Europa y los Estados Unidos, Monseñor Rivera se ha mostrado opuesto a la prolongación de la ayuda militar norteamericana y ha insistido en la necesidad de una pronta negociación entre las partes en conflicto, postura que ha recibido el respaldo



público del Papa Juan Pablo II: "todas las partes deberían buscar una solución negociada al conflicto" ("El Diario de Hoy", 6 de abril de 1981). Ante la acusación de que propiciar la mediación es hacerle el juego al comunismo, Monseñor Rivera afirmó en una homilía dominical que si algunos veían el diálogo como una maniobra de la izquierda, que lo utilizaría como compás de espera para reafirmarse, otros consideraban que el llamado a elecciones sin signos concretos de buena voluntad sería otro tipo de "compás de espera de quienes sólo desean recuperar privilegios perdidos" ("El Mundo", 4 de mayo de 1981).

La Unidad Popular Democrática (UPD).

La UPD constituye un grupo de reciente formación, en cuyo interior se encuentran varias centrales sindicales y sindicatos importantes, como la CTS, la CCS, FESINCONSTRANS, la UCS, y algunas asociaciones profesionales y gremiales, como AGEPYM, SIPCES y un partido como el PUCA. La UPD declara no tener compromisos con partidos políticos o con el gobierno, aun cuando ha sido vista como una forma de "alianza blanca", favorable a los propósitos reformista del gobierno. En cualquier caso, la UPD representa en la actualidad una indudable fuerza política de derecha moderada y ha jugado un incipiente papel de instancia crítico-estimulante respecto a la JRG.

Desde el comienzo de su existencia, la UPD sostuvo la necesidad de una salida política y no militar a la crisis de El Salvador, y periódicamente ha insistido en la necesidad de un diálogo entre las partes en conflicto. De esta manera, la UPD afirma indirectamente no estar involucrada en el conflicto mismo.

En su más reciente pronunciamiento, la UPD (1981) especifica que para que se dé el diálogo hace falta unas condiciones previas. Las más significativas serían: el alto al fuego, la reestructuración de los cuerpos de seguridad, la investigación de los desaparecidos políticos, el levantamiento del Estado de Sitio y la censura de prensa, y la apertura de la Universidad de El Salvador. Una vez cumplidas estas condiciones, las partes podrían dialogar con la mediación de la Conferencia Episcopal de El Salvador.

Las condiciones presentadas por la UPD retoman en lo esencial varias exigencias del "Foro Popular" formado en septiembre de 1971 y del que eran integrantes varios de los actuales miembros de la UPD (Plataforma, 1979). Hay también una notable coincidencia entre estas condiciones y los puntos supuestamente contenidos en el "Plan Bowdler" norteamericano (El Departamento, 1981a) así como con las condiciones mínimas que establece el mencionado documento de la Comisión Política Diplomática del FDR-FMLN para pasar de una mediación a una negociación ("El Mundo", 27 de abril de 1981).

El Frente Democrático Revolucionario (FDR).

Como ya se indicó más arriba, incluimos aquí la postura pública común tanto al FDR como al FMLN, principalmente tal como ha sido expresada por el actual Presidente del FDR, el Doctor Guillermo Manuel Ungo, quien es también miembro de la Comisión Política Diplomática del FDR-FMLN, y Secretario General del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), partido afiliado a la Internacional Socialista.

El FDR ha estado abierto desde el principio a un proceso de mediación, aunque tardara en reaccionar a la propuesta norteamericana de diálogo según el "Plan Bowdler" (El Departamento, 1981b). El FDR no cree posible un diálogo directo con Duarte, al que no considera un interlocutor válido ("La Prensa Gráfica", 26 de febrero de 1981), ni considera posible una negociación directa con la JRG, que no ofrece credibilidad ni garantía alguna ("El Mundo", 30 de

abril de 1981), ni acepta dialogar mientras dure la intervención norteamericana en el país ("El Mundo", 4 de abril de 1981). El FDR mantiene que tanto el diálogo o negociación directa como las elecciones, a las que apela la JRG, requieren unas condiciones mínimas, que no se dan en la actualidad ("Diario Latino", 4 de marzo de 1981). Las principales de estas condiciones serían: la liberación de los presos políticos; el levantamiento del Estado de Sitio y de la Ley Marcial; la apertura de los medios de comunicación social y su acceso a la oposición; la apertura de la Universidad de El Salvador ("El Mundo", 27 de abril de 1981: ver, también, las declaraciones de la Comandante "Ana María", segunda responsable de las FPL, el 22 de abril de 1981).

Puesto que estas condiciones no se dan actualmente en el país, el FDR considera que la única forma de avanzar hacia una solución política es a través de un proceso de mediación. Una mediación como la propuesta por la Internacional Socialista sí representa un marco político adecuado y realista, que permitiría preparar un futuro diálogo, negociando las condiciones en que habría de darse. "En el marco de la mediación, se podrá hablar con todas las partes involucradas en el conflicto y hasta con el gobierno de José Napoleón Duarte" y así "permitirá conocer dentro del gobierno quiénes son los que realmente tienen una intención favorable y no demagógica y falsa" ("El Día", Madrid, 5 de marzo de 1981).

La Organización Socialista Internacionalista (OSI).

Se trata de un pequeño grupo de izquierda radical, de carácter predominantemente trotskista. Su significación política no estriba en sus recursos materiales, que no los tiene, o en el número de sus adeptos, muy reducido, sino en su innegable combatividad así como en el atractivo que en un momento determinado su radicalismo ideológico podría ejercer sobre determinados estratos de la población (como ocurrió con un grupo similar en Nicaragua).

La OSI se opone frontalmente a todo tipo de negociación o diálogo. Los titulares de su semanario "Socialista" lo declaran enfáticamente: "Por nuestros compas caídos: jamás negociaremos con el enemigo" (OSI, 1981a); "¡No dialoguemos! ¡Lancemos la insurrección!" (OSI, 1981c). La OSI ofrece tres razones para rechazar

CUADRO 2
SINTESIS DE LA ACTITUD DE VARIOS GRUPOS ANTE EL CONFLICTO
EN EL SALVADOR Y SU POSIBLE SOLUCION

	A P	F A	U S A	PDC	IG	UPD	FDR*	OSI
Causa última del conflicto	Subversión internacional	Subversión internacional	Subdesarrollo	50 años de injusticia	Violencia institucionalizada	Subdesarrollo y corrupción	Opresión estructural capitalista	Dominación imperialista
Causa inmediata del conflicto	Agitación comunista	Desarrollo e internacionalización de guerrilla	Expansionismo ruso	Creencia FDR en victoria militar	Violencia reclusa	Excesiva represión	Aniquilación de oposición política	Disposición a la insurrección
Posibilidad de una solución puramente militar.	Sí	Sí	No	No	No	No	No	Sí
Solución preferida	Militar	Militar	Sobre todo militar	Político-militar	Política	Política	Político-militar	Militar
Por qué es la mejor solución	Aniquilar izquierda	Aniquilar guerrilla	Mostrar firmeza a rusos	Viabilizar gobierno	Fundar una paz estable	Posibilitar pacto social	Alcanzar raíces estructurales	Aniquilar burguesía
Postura ante una mediación	No; transacción ignominiosa	No; ningún diálogo con terroristas	No; no es solución democrática	No; constituye nueva táctica de izquierda	Sí; es el único camino para la paz	Sí; es el camino democrático	Sí; es parte del proceso político	No; ningún diálogo con imperialismo
Razón de su postura ante una mediación	Izquierda busca régimen totalitario y ha sido derrotada	Terroristas quieren destruir a FA	No ceder ante comunismo en C.A.	Izquierda ha perdido militarmente	Ambas partes tienen algo de razón	Sin diálogo seguirá el conflicto	Salir del impasse militar	Traición al pueblo
Aceptaría unas elecciones	Sí; entre derechas	Sí; sin comunistas	Sí; bajo control	Sí; tras pacificación	Sí; con condiciones	Sí; previas condiciones	No; no hay condiciones	No
Objetivo político	Restablecer situación anterior	Lograr nuevo pacto social beneficioso para la FA	Mantener control sobre gobierno y zona C.A.	Pacto entre el centro y la derecha	Establecer gobierno de concordia, más justo	Establecer democracia liberal	Establecer gobierno democrático-revolucionario	Establecer gobierno del pueblo

* Se sintetiza aquí la postura oficial manifestada por la doble unidad del FDR y del FMLN, aun cuando existen importantes diferencias entre los grupos democráticos y los grupos revolucionarios, así como entre los diversos grupos político-militares entre sí.

cualquier tipo de negociación: 1) no es buena táctica, ya que no detendrá al intervencionismo norteamericano; incluso cabe pensar que la ofensiva de enero fracasó porque no buscaba el aniquilamiento del enemigo sino el diálogo (OSI, 1981b, pág. 4); 2) negociar representa la claudicación ante el enemigo; y 3) negociar es contrario a la voluntad de las masas.

La única alternativa posible a la negociación es la insurrección popular que aniquile a la dictadura y expulse al imperialismo norteamericano. Sólo entonces, "sobre el cadáver de la dictadura, con las fuerzas imperialistas expulsadas de nuestro suelo patrio" (OSI, 1981, pág. 3), tendrá sentido algún tipo de negociación.

El Cuadro 2 sintetiza las posturas de los grupos analizados ante el conflicto salvadoreño y su posible solución. Se ha añadido en él una serie de aspectos omitidos en el texto, donde nos hemos reducido a examinar la actitud ante la solución política.

Del análisis anterior se pueden sacar tres conclusiones provisionales: en primer lugar, varios grupos no tienen suficiente claridad sobre la forma concreta como puede buscarse una solución política al conflicto del país; en segundo lugar, tanto en la izquierda como en la derecha del espectro político hay unos grupos con una actitud más positiva y otros con una actitud más negativa hacia la solución no militar al conflicto; finalmente, el convencimiento de haber triunfado o de poder triunfar militarmente influye decisivamente en la postura hacia la solución política.

La primera conclusión afirma que varios grupos carecen de suficiente claridad sobre la forma concreta como puede buscarse una solución política al conflicto del país, aunque afirman públicamente la necesidad de ese tipo de solución. A juzgar por los documentos analizados, tan sólo el FDR y quizás en parte la UPD distinguen suficientemente entre lo que es un diálogo, una negociación y una mediación. El FDR se opone al diálogo en la forma de negociación directa, pero considera posible dialogar en el marco de una mediación. No está clara, por el contrario, la distinción que hace el PDC (y por consiguiente, la JRG) entre diálogo y negociación; como ya indicamos, la confusión parece originarse en su comprensión de la negociación como un simple reparto de puestos gubernamentales. Por otro lado, no aparece hasta el momento que el PDC distinga suficientemente entre negociación y mediación, ya que en principio no se ve por qué

su propuesta de diálogo no podría tener lugar en el marco de una mediación, en el que muy posiblemente participaría la Democracia Cristiana Internacional.

Podría argüirse que algunos de estos grupos proponen un proceso electoral como salida política al conflicto. Supuestamente, en unas elecciones libres el pueblo podría manifestar su voluntad. Pero es aquí donde un análisis documental debe ser examinado críticamente a la luz de los hechos y las acciones objetivas de los actores. En El Salvador de 1981 no existen en absoluto las más mínimas condiciones para un proceso electoral (Federación, 1981), y un análisis sereno lleva a la ineludible conclusión de que esas condiciones no van a existir por mucho tiempo. De este modo, el llamado a elecciones se convierte en una simple promesa para un futuro lejano y vago, que permite entre tanto la solución militar. Más aún, precisamente con el argumento de que hay que crear condiciones para un proceso electoral, se ponen de hecho toda la energía y todos los recursos en aniquilar militarmente a "la subversión". Las prometidas elecciones futuras exigen y justifican en el presente una solución puramente militar. "Proponer como solución política inmediata la convocatoria de elecciones se convierte así en un pretexto para proseguir con una solución puramente militar, en la que el intervencionismo norteamericano juega la mayor parte en un abuso de poder" (Un proceso, 1981, pág. 15). Resulta lógico entonces que la solución de las elecciones sea propuesta de palabra precisamente por aquellos grupos que más abiertamente muestran con sus acciones su opción por una solución militar; la AP, la FA y los USA.

En el caso de los sectores más extremos, que serían la AP y la FA por la derecha, la OSI por la izquierda, el rechazo factual a toda forma de solución política negociada parece corresponder a esquemas ideológicos rígidos, para los que el simple reconocimiento del enemigo constituye ya una claudicación y una derrota. Algo similar podría afirmarse del actual gobierno norteamericano, que ha convertido el conflicto salvadoreño en un caso paradigmático de su nueva postura de fuerza ante Rusia, aunque es posible que la intransigencia de USA tenga que ir cediendo con el tiempo ante la presión externa e interna. La argumentación, en todos estos casos, aparece cargada ideológicamente y se sirve del estereotipo para descalificar al enemigo como eventual interlocutor: se trata de "terroristas" o "impe-

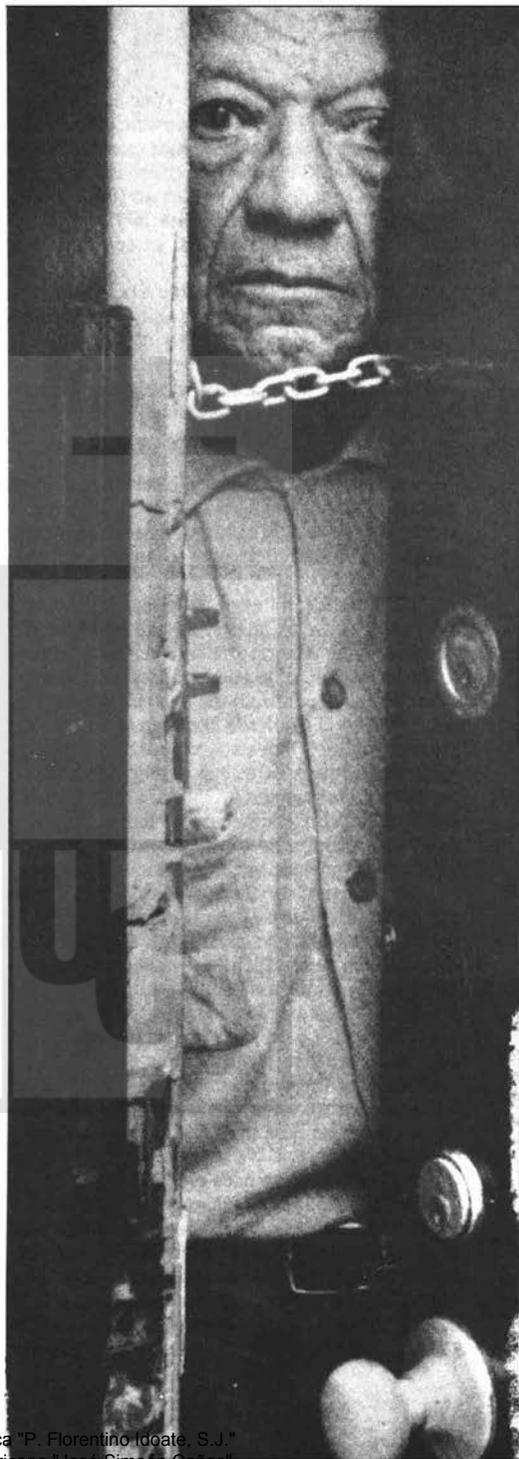
rialistas", de la "subversión" o la "dictadura". Como afirmaba rotundamente el Coronel García en una conferencia de prensa, "si lo ha dicho la subversión, es mentira". Esta descalificación apriórica impide posturas matizadas y reduce la solución del conflicto al simple dilema entre la victoria total o la derrota absoluta.

La segunda conclusión es que tanto en la izquierda como en la derecha del espectro político salvadoreño hay unos grupos con una actitud más positiva y otros con una actitud más negativa hacia una solución no militar al conflicto. Por la derecha, la AP y la FA ofrecen una postura de total intransigencia hacia el FDR, con el que no conciben ningún tipo de diálogo o negociación. La publicación de la "lista negra" y su ulterior defensa por parte de la FA muestra a las claras la voluntad de cerrar toda posibilidad de una solución política. Como ya hemos indicado, la propuesta de elecciones a la que ambos grupos expresan su adhesión les resulta aceptable tan sólo tras la aniquilación militar de los grupos insurgentes y en el contexto constitucional que bloquea en la práctica el acceso al poder a partidos que no sean de orientación derechista.

En el otro extremo del espectro político, la OSI rechaza virulentamente cualquier forma de diálogo o negociación, que en su perspectiva constituye una total traición al pueblo. Junto a estas posturas intransigentes y militaristas, los planteamientos del FDR, por la izquierda, y de la UPD, por el centro-derecha, resultan relativamente flexibles y muestran una apertura hacia un eventual diálogo o, por lo menos, hacia aquellos pasos previos que, como una mediación, puedan abocar a una negociación de paz. Incluso ciertas afirmaciones del PDC mostrarían su voluntad de hallar una verdadera solución política; sin embargo, su participación en la JRG obliga a los voceros democristianos a plegarse a la actitud de quien realmente tienen el poder político, que es el sector militar.

La tercera conclusión pone de manifiesto que el rechazo a la solución no-militar aparece vinculado precisamente al convencimiento de haber derrotado al enemigo (AP y FA) o de ser todavía capaz de derrotarlo (USA y OSI). Esta relación entre la percepción de la confrontación armada y la actitud hacia una negociación parece obvia, y conduce a la argumentación de que sería absurdo ceder en la mesa de negociaciones lo ganado (o ganable) en el campo de batalla.

La aparente obviedad de esta tercera conclu-





sión se apoya en el presupuesto, nada obvio, de que una victoria militar hace innecesario el acuerdo político con el derrotado. En el caso de El Salvador, esto sería un gravísimo error, ya que, dadas las dimensiones del país y el carácter de su economía, bastaría un pequeño puñado de hombres convencidos para desestabilizar permanentemente a cualquier gobierno. Sería también un error porque, como ya indicamos, las raíces últimas del conflicto en El Salvador se encuentran en las condiciones sociales que afectan a la mayoría de la población y, mientras no se atiende a esas raíces (lo que en modo alguno se consigue mediante una victoria militar), el conflicto resurgirá cada vez con mayor fuerza.

Resulta todavía menos obvio que uno de los bandos —en el presente caso, la FA— haya obtenido ya una victoria militar, o que el otro —el FDR y el FMLN— puedan lograr en el futuro inmediato una insurrección que les alcance una victoria incondicional. De hecho, todos los datos parecen apuntar a un impasse militar: por un lado, los insurgentes han logrado afianzar su control funcional de amplias zonas del país, a pesar de gigantescos operativos de la FA realizados con toda la parafernalia de guerra norteamericana y la dirección de “asesores” especializados en contrainsurgencia; por otro lado, no hay duda de que la FA ha multiplicado aceleradamente su capacidad de combate, tanto en hombres como en armamento, y no parece que los insurgentes tengan o vayan a tener pronto capacidad para derrotarla en el terreno estrictamente militar. Así, pues, ni la superioridad global de la FA parece capaz de aniquilar a los insurgentes, ni éstos parecen capaces de derrotar al aparato militar del gobierno. Cerrarse entonces a alguna forma de solución pacífica supone de hecho una ignorancia de la realidad o un peligroso obcecamiento ante ella, más que una muestra de fortaleza ideológica o de moral victoriosa.

4. Actitudes individuales ante el conflicto.

A fin de contrastar el examen documental de las actitudes grupales ante el conflicto, examen que, por principio, siempre refleja una visión ideologizada a nivel propagandístico, pareció importante realizar un sondeo de opinión que compulsara más directamente las actitudes de los propios individuos. El objetivo de este sondeo de opinión era doble: por un lado, examinar a nivel descriptivo las actitudes individuales ante algu-

nos aspectos del conflicto y su posible solución; por otro lado, verificar la relación de esas actitudes con otros factores que permitieran clarificar su porqué.

Ante la situación de guerra en el país, el sondeo tuvo que limitarse a un grupo de 750 estudiantes voluntarios de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Con la única salvedad proveniente de su carácter voluntario y la incidencia que éste pudiera tener en los resultados obtenidos (Rosenthal y Rosnow, 1975), la muestra estratificada lograda es suficientemente representativa de la población de la UCA, consistente en 5,000 estudiantes. Hay notorias diferencias en el nivel económico de esta población estudiantil, pero la gran mayoría pertenece a los sectores urbanos pequeño-burgueses. Por tanto, los presentes resultados pueden ser tomados como un buen índice sobre las actitudes ante el conflicto de estos sectores, sobre todo en el área metropolitana de San Salvador.

Por diversos errores computados en la forma de responder, se anularon 31 cuestionarios (4.1% del total), con lo que la muestra final analizada quedó reducida a 719 sujetos. De ellos, el 55.4% son hombres, y 44.6% mujeres. La edad media de la muestra es de 22 años, aunque el rango cubre personas desde los 17 años hasta los 44 años. El 85.3% de los encuestados se declaró soltero y el 10% casado. Es importante anotar que, además de estudiar en la UCA, un 15.5% declaró que su ocupación principal era la de empleado (tanto en el sector público como en el privado), un 11.2% declaró ser contadores o secretarías, un 8.4% profesores, un 3.5% ejecutivos intermedios, y un 2.5% adicional señaló otras ocupaciones principales. Este es un punto que hay que tener en cuenta a la hora de ponderar la posible generalización de las opiniones de esta población universitaria a otros sectores del país.

A nivel descriptivo, la primera pregunta del cuestionario era la siguiente: "Mirando al mayor bien posible para la población de El Salvador, ¿cuán justa le parece a usted la postura de los siguientes grupos en el conflicto actual?" Los resultados obtenidos se encuentran sintetizados en la Tabla 1.

Aunque los resultados hablan por sí solos, conviene hacer dos breves observaciones. En primer lugar, es claro que este sector tiende a considerar más justa la postura del FDR y del FMLN que la postura del resto de los grupos. En segundo lugar, impresiona el elevado porcentaje de

TABLA 1
EVALUACION DE LA JUSTICIA DE LA
POSTURA DE LOS DIVERSOS GRUPOS
ANTE EL CONFLICTO EN EL SALVADOR
(En porcentajes)

GRUPOS	POSTURA ANTE EL CONFLICTO			
	Nada justa	Poco justa	Bastante justa	Muy justa
La Alianza Productiva	25.5	44.0	22.6	7.9
La Fuerza Armada	49.3	34.8	13.1	2.8
El Frente Democrático Revolucionario	16.0	34.4	34.9	14.7
El F.M.L.N.	25.1	35.1	26.7	13.1
La Junta de Gobierno	35.1	42.8	18.4	3.8
Los Estados Unidos	51.7	29.7	15.1	3.5
(N = 719)				

personas que consideran "nada justa" la postura de los USA o de la FA. Juntando los porcentajes de actitudes negativas, un 84.1% consideran poco o nada justa la postura de la FA ante el presente conflicto, y una 81.4% opinan lo mismo de la postura de los USA. Sin embargo, es importante indicar también que en todos los casos hay un porcentaje no despreciable de personas que consideran la postura de cualquiera de los grupos al menos como "bastante justa". Esto puede ser tomado como un indicador de la aceptación e incluso identificación de esas personas con tales grupos, lo que sería una muestra de la diversidad de actitudes y fidelidades sociopolíticas existente al interior de esta población universitaria así como de aquellos sectores de los que esta población sea representativa.

La segunda pregunta del cuestionario es la siguiente: "Dadas las condiciones presentes, ¿cuál cree usted que sería la mejor manera de resolver el conflicto actual?" La Tabla 2 presenta los resultados obtenidos. Llama la atención la abrumadora preferencia por un proceso de mediación y/o negociación, acompañado por un alto a la lucha armada. Resulta difícil no interpretar esta opinión como el reflejo de un anhelo de paz y de que haya un acuerdo entre las diversas fuerzas que realmente haga posible esa paz. Por otro lado, es importante apuntar a ese 17.0% que manifiesta no tener una opinión clara sobre cuál sea la mejor solución al actual conflicto. Este porcentaje es tanto más significativo cuanto que

es parte de aquel sector de la población salvadoreña que con toda probabilidad está mejor informado y tiene más posibilidades de formarse un juicio global sobre los problemas del país.

Finalmente, una tercera pregunta indagaba de las personas cuáles consideraban ser las dos principales dificultades para el logro de una solución pacífica al actual conflicto. La pregunta está formulada de la siguiente manera: "¿Cuáles cree usted que son actualmente las principales dificultades para que haya un arreglo pacífico en El Salvador?" La Tabla 3 presenta los resultados obtenidos, incluyendo las dos dificultades señaladas como más importantes por cada persona, sin distinguir entre la primera y la segunda. La principal dificultad indicada por más personas es "la dependencia respecto a los Estados Unidos", lo que refleja la conciencia de esta población sobre el militarismo del actual gobierno norteamericano.

Además del nivel descriptivo, los resultados de este sondeo nos permiten realizar algunos análisis sobre las opiniones expresadas. La primera pregunta que nos formulamos fue la de si la solución considerada como mejor para el presente conflicto en El Salvador difiere entre aquellos que califican de justa la postura de uno u otro grupo y que, por consiguiente, pueden identificarse psicológicamente con ellos. La respuesta a esta pregunta está sintetizada en la Tabla 4.

Los resultados presentados en la Tabla 4 merecen unos breves comentarios. En primer lugar, en ella aparece con claridad un agrupamiento polar de grupos, en el sentido de las diferentes soluciones ofrecidas por quienes consideran justa la postura del FDR y del FMLN, por un lado, y de quienes consideran justa la postura de los demás grupos, por otro. Esta diferenciación aparece con claridad en la opción por proseguir la lucha o por empezar un proceso de mediación y/o negociación, pero continuando la lucha, de quienes consideran justa la actitud del FDR-FMLN, soluciones mayoritariamente rechazadas por los demás. Paralelamente, mientras estos últimos apoyan, aunque con sensibles diferencias, la solución de unas elecciones, los que aprueban al FDR-FMLN rechazan casi absolutamente esa solución. Con todo, el dato más notable de la Tabla 4 consiste en que, en todos los casos, la solución preferida es la de "empezar un proceso de mediación y/o negociación, deteniendo la lucha armada", con porcentajes significativamente

TABLA 2
MEJOR SOLUCION AL CONFLICTO EN EL SALVADOR

MEJOR SOLUCION	N	%
1. Empezar un proceso de mediación y/o negociación, deteniendo la lucha armada	369	51.5
2. Seguir con la lucha armada hasta que venza una parte	82	11.4
3. Empezar un proceso de mediación y/o negociación, mientras sigue la lucha armada	75	10.5
4. Aceptar el llamado a elecciones de la Junta de Gobierno	69	9.6
No tienen una opinión clara	122	17.0
T o t a l	717	100.0

TABLA 3
PRINCIPALES DIFICULTADES PARA UNA SOLUCION PACIFICA EN EL SALVADOR*

Principal dificultad	N	%
1. La dependencia respecto a Estados Unidos	309	22.5
2. Los intereses económicos de la oligarquía	236	17.2
3. El peligro objetivo del comunismo internacional	158	11.5
4. La brutalidad de los cuerpos de seguridad	145	10.6
5. La incapacidad del gobierno	137	10.0
6. El odio entre las clases sociales	110	8.0
7. La intransigencia de algunas organizaciones populares	110	8.0
8. La polarización de las posturas por el poder	102	7.5
9. Las exigencias económicas de la mayoría	50	3.6
10. Otras dificultades	15	1.1
T o t a l	1372	100.0

* Se han incluido las dos principales dificultades señaladas por cada persona sin distinguir entre la primera y la segunda.

mayores que los de cualquier otra posible solución. Una vez más, es difícil no interpretar este dato como un deseo mayoritario de este sector poblacional por una pronta solución al conflicto, independientemente de sus inclinaciones sociales o ideológicas por uno u otro grupo. Anotemos también como significativo el que el porcentaje de

TABLA 4
MEJOR SOLUCION AL CONFLICTO EN EL SALVADOR SEGUN
QUIENES JUZGAN JUSTA LA POSTURA DE CADA GRUPO
(En porcentajes)

POSTURA JUSTA*	MEJOR SOLUCION AL CONFLICTO					N Total
	Lucha	Elecciones	Mediación y lucha	Mediación y paz	Sin opinión	
AP	2.8	15.1	5.7	61.8	14.6	(212)
FA	3.5	31.0	3.5	45.1	16.8	(113)
FDR	20.3	2.9	16.9	45.8	14.0	(349)
FMLN	23.1	2.1	18.9	40.9	14.9	(281)
JRG	1.9	25.3	4.4	56.3	12.0	(158)
USA	3.0	24.8	4.5	49.6	18.0	(133)
Total% N	12.3 (153)	12.5 (156)	11.3 (141)	49.0 (612)	14.8 (184)	100.0 (1246)

* En cada grupo se computan únicamente las respuestas de aquellas personas que consideraron la postura del respectivo grupo ante el conflicto actual como muy justa o bastante justa.

TABLA 5
VALOR MEDIO DE LAS OPINIONES ACERCA DEL CONFLICTO SEGUN
LA SOLUCION JUZGADA MEJOR

MEJOR SOLUCION	OPINIONES*					N**
	O vence guerrilla o todo igual	Negociar es solución pa- ra todos	La lucha es hoy impar- table	Elecciones expresarán voluntad popular	Negociar significa rendirse	
Seguir lucha	2.3	1.4	2.6	1.2	2.3	78-81
Elecciones	1.8	2.0	2.0	2.7	1.5	66-69
Mediación y lucha	2.1	2.1	2.4	1.4	1.6	73-74
Mediación y paz	2.0	2.4	2.1	1.8	1.4	361-365
Sin opinión	1.9	1.8	2.2	1.9	1.8	120-122
\bar{X} del total	2.0	2.1	2.2	1.8	1.6	702-706

* El acuerdo expresado oscila en una escala de dos puntos (de 1.0 a 3.0). Los puntajes más altos indican mayor acuerdo con la opinión.

** El número de respuestas promediadas oscila según la opinión. El N expresa los márgenes en el número de respuestas.

los que no tienen clara una opinión sobre cuál sea la mejor solución al conflicto es casi idéntico en todos los casos.

Un aspecto importante desde el punto de vista psicosocial consiste en preguntarse por las razones por las que se prefiere una u otra solución al conflicto. La Tabla 5 ofrece un tipo de respuesta (limitado, por supuesto) a esta pregunta. En ella aparece que quienes indican que seguir la lucha hasta que venza una de las partes es la mejor solución (y que, como vimos, son en su mayoría quienes califican de justa la postura del FDR y del FMLN), lo hacen primero porque consideran que la lucha hoy por hoy no se puede detener, pero también porque opinan que si la guerrilla no venciere, todo seguirá igual en El Salvador. Es clara su desconfianza casi total acerca de un proceso de elecciones y no creen que una negociación pueda ofrecer una solución que

satisfaga a todos, sino que significaría de hecho un rendirse al enemigo. En esto último discrepan de quienes optan por seguir la lucha, pero iniciando un proceso de mediación y/o negociación, que no creen que negociar signifique rendirse al enemigo. Este grupo parece pensar que la negociación tendrá posibilidades de ofrecer resultados positivos si es acompañada por una actividad militar (supuestamente exitosa). Obviamente, aquellos que optan por empezar un proceso de mediación y/o negociación, pero deteniendo la lucha armada, son quienes más creen que algún tipo de negociación puede representar el camino para una solución que satisfaga a todos. Es importante recordar que esta solución fue la preferida por más personas, independientemente de cuál fuera el grupo cuya postura consideraran justa.

TABLA 6
PRINCIPAL DIFICULTAD PARA UNA SOLUCION PACIFICA
SEGUN QUIENES JUZGAN JUSTA LA POSTURA
DE CADA GRUPO

POSTURA JUSTA*	PRINCIPALES DIFICULTADES**		
	Primera dificultad	Segunda dificultad	Tercera dificultad
AP	Peligro de comunismo 24.4% (N = 49)	Dependencia de USA 24.4% (N = 49)	Intransigencia de Organ. Populares 11.0% (N = 22)
FA	Peligro de comunismo 41.1% (N = 44)	Dependencia de USA 15.9% (N = 17)	Intransigencia de Organ. Populares 13.1% (N = 14)
FDR	Dependencia de USA 47.5% (N = 161)	Intereses de la oligarquía 18.0% (N = 61)	Incapacidad del gobierno 8.6% (N = 29)
FMLN	Dependencia de USA 47.0% (N = 127)	Intereses de la oligarquía 19.6% (N = 53)	Incapacidad del gobierno 9.3% (N = 25)
JRG	Peligro de comunismo 37.2% (N = 55)	Dependencia de USA 14.9% (N = 22)	Intransigencia de Org. Populares 13.5% (N = 20)
USA	Peligro de comunismo 36.2% (N = 46)	Dependencia de USA 14.2% (N = 18)	Intransigencia de Organ. Populares 12.6% (N = 16)

* En cada grupo se computan únicamente las respuestas de aquellas personas que consideraron la postura del respectivo grupo ante el conflicto actual como muy justa o bastante justa.

** Se ha computado únicamente aquella dificultad señalada por las personas como la más importante.

Finalmente, se ha examinado si el juicio sobre la justicia de las posturas grupales ante el conflicto lleva a percibir las mismas o distintas dificultades para una solución pacífica al conflicto actual. La Tabla 6 presenta una síntesis de los resultados obtenidos.

Los resultados de la Tabla 6 corroboran la tendencia a la polarización en la percepción de la realidad entre quienes ven como justa la postura del FDR y del FMLN, por un lado, y los que ven como justa la postura del resto de los grupos, por otro. Son exactamente las mismas las tres dificultades principales indicadas en uno y otro caso. Pero hay algo mucho más significativo: en todos los grupos, incluso en el de aquellos que consideran justa la postura de los USA ante el conflicto salvadoreño, la dependencia de El Salvador respecto a los norteamericanos es considerada como una importante dificultad para una solución pacífica al conflicto. En otras palabras, el militarismo de los Estados Unidos no sólo aparece con claridad en la conciencia de esta población universitaria, sino que parece haber una notable coincidencia en amplios sectores de que esta postura obstaculiza la solución pacífica al conflicto del país. No es difícil intuir en esta actitud un rechazo a la postura adoptada por el gobierno de Reagan y quizá un creciente sentimiento de anti-norteamericanismo, nunca anteriormente detectado con tanta nitidez en los estratos pequeño-burgueses de El Salvador.

5. Reflexiones finales.

La fluidez que caracteriza al actual proceso salvadoreño sólo permite llegar a conclusiones muy tentativas y provisionales sobre las actitudes de los diversos grupos. Nuevos factores endógenos o exógenos, como la retirada del gobierno de la Democracia Cristiana, otro golpe de estado o la agudización del enfrentamiento en Guatemala, podrían alterar muy esencialmente tanto la correlación actual de fuerzas como el sentir de personas y aun de grupos concretos. Trataremos, por tanto, de limitarnos a unas breves reflexiones finales, que recojan aquellos aspectos que más podrían ayudar a clarificar las posturas de los grupos en El Salvador ante el conflicto actual.

En primer lugar, parece claro que todos los grupos tienden a una polarización en el conflicto actual, pudiéndoseles ubicar como más o menos favorables a uno u otro de los contendientes. Sin embargo, no se trata de un cuadro de blanco y

negro homogéneos; por el contrario, junto a grupos inflexiblemente decididos por una solución militar al conflicto, hay otros grupos convencidos de la necesidad de una solución política y abiertos en mayor o menor grado a iniciar un proceso de negociación, sin que esto implique cuál sería la forma más conveniente de este proceso. Cuando de la postura pública de los grupos pasamos a las actitudes de los individuos, parece claro que incluso en los grupos con actitud más belicosa hay sectores deseosos de que se inicie un proceso de negociación que conduzca al establecimiento de una paz satisfactoria para toda la población salvadoreña.

La aparente discrepancia entre la postura pública de algunos grupos y el deseo de por lo menos ciertos sectores favorables a esos grupos, nos lleva a preguntarnos en qué medida el sentir de la población es adecuadamente canalizado por los grupos formalmente constituidos. La publicación por parte de la FA de un documento preliminar presentado a la Comisión Política Diplomática del FDR-FMLN llevó a muchos la duda razonable de si el FDR realmente quería entrar en un proceso de negociación mediada o de si simplemente utilizaba este mecanismo como una táctica para ganar tiempo, sin voluntad real de buscar una solución negociada. Esta duda ha sido ya clarificada y el FDR-FMLN ha mostrado su voluntad sincera de negociar y de entrar en un proceso de mediación, cuya dinámica misma desborda posibles intereses preliminares. Por otro lado, la persistencia de la JRG, la FA y los USA de proponer las elecciones como única salida "democrática" al conflicto, resulta a todas luces la expresión de una negativa rotunda a todo tipo de negociación real (Gutiérrez, 1981) y una opción casi absoluta por la solución militarista, incluso contra el sentir de algunos sectores simpatizantes. En este sentido, se comprende que quienes tienden a identificarse con el FDR-FMLN rechacen tan frontalmente la propuesta de elecciones, recurso históricamente manipulado en el país (en cada caso con la promesa de la FA de que sería garante de la pureza del proceso), y para el que no existen ni podrán existir en el futuro cercano condiciones mínimas de viabilidad (Federación, 1981).

El obstinamiento de la FA y, por consiguiente, de la JRG por una solución puramente militar al conflicto tiene su base última en el apoyo que recibe esta solución de la postura militarista del gobierno norteamericano. La adminis-

tración del señor Reagan está convirtiendo aceleradamente a El Salvador en un enclave de sus intereses geopolíticos, y la dirección de la actual política salvadoreña parece corresponder cada vez más a la particular visión del gobierno norteamericano, no a las características específicas de los problemas del país. La opción militarista de los USA oculta las raíces últimas del actual conflicto en el Salvador, bloqueando con ello las posibilidades de solución que existen en la actualidad y agudizando más y más los problemas estructurales de fondo. Ello es percibido no sólo por los partidarios del FDR y del FMLN, sino por amplios sectores incluso favorables a la postura de los Estados Unidos. No parece casual que la dependencia respecto a los Estados Unidos haya aparecido en nuestro sondeo como la principal dificultad para una solución pacífica al conflicto salvadoreño, y que esta opción sea compartida tanto por aquellos que justifican la postura de la izquierda como por aquellos que justifican la postura de la FA y aun de los mismos USA.

Si tratamos ahora de aplicar el esquema de Walton y McKersie (ver Cuadro 1) a la situación salvadoreña, probablemente habrá que llegar a la conclusión de que no es posible una negociación directa en estos momentos, ya que no existe, ni a nivel de intereses explícitos ni a nivel de conciencia pública o de declaraciones formales, una zona de posible acuerdo entre los principales grupos contendientes. Se estaría, por el contrario, en el caso en que una mediación es necesaria, a fin de superar el abismo del "esencial desacuerdo" y buscar puntos concretos de interés común.

Algunos de los grupos analizados han propuesto objetivos inmediatos que establecen ya áreas de interés común. De ahí que sería viable un diálogo constructivo, por ejemplo, entre la UPD y el FDR e incluso el mismo PDC, si éste lograra un mínimo de independencia respecto a su pacto con el gobierno o a las manipulaciones norteamericanas. Por supuesto, un diálogo que no incluya a la FA o a los USA estaría abocado al fracaso, por lo menos a corto plazo. Sin embargo el establecimiento mismo de un diálogo constituye una nueva presión sobre los interlocutores más reacios, ya que el ostracismo político resulta inviable a la larga. Ni los USA son impermeables a la presión política, ni la FA es insensible al clamor popular. La experiencia del Foro Popular de 1979 es, al respecto, un importante antecedente. Un diálogo inicial entre los grupos más abiertos a



una solución predominantemente política podría clarificar el ambiente y sentar bases mínimas comunes para un arreglo verdadero al conflicto. En todo caso, sería una respuesta al sentir de sectores posiblemente no pequeños de la población salvadoreña que anhelan una paz justa y urgente.

Excluir de antemano de cualquier arreglo a los sectores organizados del pueblo, como ha sido hasta ahora la postura de la AP, la FA y los USA, constituye un engaño político y el obstáculo principal al inicio de una verdadera solución al conflicto. Un diálogo sin el FDR-FMLN, como el que montó el General Romero y hoy intentan revivir algunos voceros del PDC, no tiene futuro alguno, como tampoco lo tendría una solución que pretendiera ignorar o aniquilar al movimiento revolucionario. Si realmente se quiere llegar a resolver el conflicto en El Salvador hay que empezar por clarificar la conciencia colectiva reconociendo los datos innegables del problema; y uno de los datos innegables es la existencia factual del FDR y del FMLN, tan real como la existencia del gobierno y de la FA, y ciertamente no menos legítima. Unos y otros tienen fuerza social, política y militar y a nada conduce negar de palabra lo que a diario evidencian los hechos. El obstinamiento militarista fue ya abandonado por

el movimiento revolucionario, tras un análisis de los errores subyacentes a su ofensiva de enero. Correspondería hoy al sector gubernamental reconsiderar su postura a la luz, no de intereses sectoriales, sino de los mismos datos objetivos de la situación.

Es necesario, también, que los intereses en juego se examinen por lo que son y representan, no a través de estereotipos o calificativos condenatorios. En la medida en que quienes tienen el poder y los medios de comunicación persistan en imponerse por la simple fuerza de la violencia o de la mentira, se estará causando un gravísimo daño al país, al hacer cada vez más difícil el inicio de una solución integral.

Por supuesto, todos estos son prolegómenos. Porque si el conflicto de El Salvador tiene raíces estructurales, son esas raíces las que hay que atacar a fondo, como la misma FA ha reconocido en sus pronunciamientos más lúcidos y el PDC sigue proclamando de palabra. Las necesidades objetivas del pueblo salvadoreño son el límite último que divide las soluciones verdaderas de las soluciones falsas al conflicto, más allá de intereses creados, por legítimos o razonables que puedan aparecer. Mientras no se llegue a un acuerdo sobre una respuesta históricamente adecuada a ese límite último se estará colaborando de hecho a prolongar, a corto o lejano plano, el espantoso baño de sangre en que se halla sumido El Salvador. Cómo lograr ese acuerdo y cómo dar esa respuesta constituyen el único reto verdadero que confrontan hoy aquellos grupos que pretenden representar a algún sector del pueblo salvadoreño.

Referencias bibliográficas

La Alianza Productiva de El Salvador ante la propuesta del diálogo. *El Diario de Hoy*, San Salvador, 13 de marzo de 1981, pág. 29. (a)

La Alianza Productiva de El Salvador denuncia maniobras. *El Diario de Hoy*, San Salvador, 21 de marzo de 1981, pág. 29. (b)

A sus órdenes mi capital. *Estudios Centroamericanos*, 1976, 337, 637-643.

Berger, P. L. y Luckmann, T. *La construcción social de la realidad*. (Traducción de S. Zuleta.) Buenos Aires: Amorrortu, 1968.

Campos, T.R. La seguridad nacional y la constitución salvadoreña. *Estudios Centroamericanos*, 1979, 369-370, 477-488.

Comblin, P. [El poder militar en América Latina; la ideología de la seguridad nacional.] París: Jean-Pierre Delarge, 1977.

Duarte, J. N. Mensaje al pueblo salvadoreño y a todos los pueblos del mundo, dirigido desde la ciudad de Juayúa, Sonsonate, el viernes 27 de febrero de 1981. *La Prensa Gráfica*, San Salvador, 7 de marzo de 1981, págs. 27-30.

Duijker, H. C. J. Las actitudes y las relaciones interpersonales. En H.C.J. Duijker, P. Fraise, R. Meili, P. Oléron y J. Paillard, *Psicología de las actitudes*. (Traducción de F. Mazia.) Buenos Aires: Proteo, 1967.

El Departamento de Estado formuló una propuesta al FDR. *América Latina, Informe semanal*. Londres, 23 de enero de 1981. (a)

El Departamento de Estado da una vuelta en U. América Latina, *Informe semanal*. Londres, 30 de enero de 1981. (b)

El Salvador, Ministerio de Planificación, Unidad de Investigaciones Muestreales. *Distribución del ingreso por deciles familiares (agosto, 1976 - julio, 1977)*. San Salvador: Ministerio de Planificación, abril de 1978. (Mimeo).

Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, Carta al Consejo Central de Elecciones de El Salvador. *El Mundo*, San Salvador, 13 de mayo de 1981.

González, G.A. ¿Genocidio y guerra de exterminio en El Salvador? *Estudios Centroamericanos*, 1980, 384-385, 983-1000.

Gutiérrez, Coronel J. A. Mensaje con motivo del día del trabajador de Telecomunicaciones. *El Mundo*, San Salvador, 28 de abril de 1981, pág. 31.

Hernández-Pico, J., Jerez, C., Elacuría, I., Baltodano, E. y Mayorga, R. *El Salvador: año político 1972*. San Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 1972.

Krech, D., Crutchfield, R.S. y Ballachey, E. L. *Psicología social*. (Traducción de A. Alvarez Villar.) Madrid: Biblioteca Nueva, 1965.

López Vallecillos, I. Reflexiones sobre la violencia en El Salvador. *Estudios Centroamericanos*, 1976, 327-328, 9-30.

López Vallecillos, I. y Orellana, V.A. La unidad popular y el surgimiento del Frente Democrático Revolucionario. *Estudios Centroamericanos*, 1980, 377-378, 183-206.

Martin-Baró, I. La guerra civil en El Salvador. *Estudios Centroamericanos*, 1981, 387-388, 17-32.

Mayorga, R. *Una solución política negociada para El Salvador*. El Colegio de México, marzo de 1981. (Mimeo)

Organización Socialista Internacionalista (OSI), *Socialista*. Número 25, 20 de febrero de 1981 (a). Número 26, 27 de febrero de 1981 (b). Número 27, 6 de marzo de 1981 (c).

Plataforma común del Foro Popular. *Estudios Centroamericanos*, 1979, 371, 843-845.

Rosenthal, R. y Rosnow, R.L. [El sujeto voluntario.] New York: John Wiley & Sons, 1975.

Touzard, H. *La mediación y la solución de los conflictos*. (Traducción de Diorki.) Barcelona: Herder, 1981.

La Unidad Popular Democrática (UPD) insta a implementar el camino hacia la pacificación y plena democratización del país. *El Mundo*, San Salvador, 28 de marzo de 1981, pág. 29.

Un proceso de mediación para El Salvador. *Estudios Centroamericanos*, 1981, 387-388, 3-16.

Walton, R. E. y McKersie, R.B. *Teoría de las negociaciones laborales*. Barcelona: Labor, 1976.